

Panamá | Entre la criminalidad, las mafias económicas y las pandillas

Por: Enoch Adames M. 02/06/2021

Manifestaba Immanuel Wallerstein, que en esta etapa caótica de transformación del “sistema-mundo” presenciamos el desplome a este sistema, “debido a que se han agotado sus posibilidades de ajustes estructurales, quienes detentan el poder y los privilegios no se van a quedar sin hacer nada. Se organizarán para sustituir el actual sistema-mundo con otro igual de jerárquico y desigual, si bien basado en principios diferentes”.

Podríamos agregar, que la pandemia global ha acelerado este caótico proceso, empujados a nivel global hacia un período sin precedentes de grandes turbulencias sociales, políticas y militares. Entre ellas, también, la transnacionalización del crimen organizado, de las mafias financieras y las pandillas delictivas.

Los nuevos y viejos actores

La criminalidad de hoy, transnacionalizada, exige ser analizada en el contexto de lo que conceptualmente hemos denominado “globalización”. Mundialización de procesos que se despliega al impulso de nuevos y viejos actores: el sistema estatal internacional (integrado y jerarquizado), las instituciones financieras internacionales (IFI’s), las empresas transnacionales, los movimientos ecologistas y medioambientales, los movimientos socioculturales, los centros de inteligencia científico-técnica (Silicon Valley, por ejemplo), los medios globales de la comunicación, las redes sociales, las organizaciones criminales transnacionales (carteles de narcotráfico, mafias financieras, traficantes de armas, organizaciones mercenarias, etc.), entre otros.

Todos ellos aportan ingredientes propios, pero en su conjunto impactan en un proceso que se materializa – en el decir de Saskia Sassen— en una “nueva geografía mundial de lugares estratégicos”. Entre ellos se abre un espacio paralelo de poder de la criminalidad internacional, que se nutre de las desarticulaciones sociales e institucionales propias de cada país.

La ruptura material del tejido social

La globalización neoliberal, que impuso transformaciones profundas a la institucionalidad estatal, la producción, el trabajo y en los mercados, generó en los países de América Latina informalidad y desigualdades sin precedentes. En nuestro país, la histórica tradicional exportación de servicios—transitismo— en el contexto de políticas neoliberales y de desregulación de los mercados, profundizó viejas y creó nuevas desigualdades sociales y regionales, forjando con ello fuertes y permanentes exclusiones.

Un rápido repaso de algunos indicadores, en el país, nos dará una aproximación:

? El 61% del total de la población asalariada tiene como “techo” (umbral superior) B/.800.00.

? En el segmento de los B/.600.00- B/.799.00, está el 28% aprox. de la población asalariada.

? Más abajo, en el segmento de los B/.400.00- B/.599.00 se concentra el 17.2% de esta población.

? Niveles salariales que adquieren sentido, cuando se les coloca frente al costo promedio de la canasta familiar de alimentos –sin considerar vivienda, servicios básicos, vestimenta, etc. — que a enero del 2021 es de B/. 267.40 en los distritos de Panamá y San Miguelito.

La fábrica de pobreza

Un hecho estilizado de la economía de comercio y servicios panameña, es la informalidad predominante de su “mercado laboral”. En el 2019 (fecha ex ante pandemia), la informalidad era del 45%; post pandemia, ésta se elevó al 53% aprox. Hecho estilizado es también, la concentración del 86.6% de todo el PIB nacional en las dos provincias del transitismo histórico (Panamá: 68.8% y Colón: 17.8%).

Dos provincias que, a su vez, aglomeran el 60% aprox. de la población total del país. Todas estas asimetrías que distorsionan la vida de nuestra población, son la expresión de un modelo de acumulación que concentra riqueza, hunde los ingresos laborales y excluye socialmente.

Esta gran desigualdad social y regional del país, dice de un modelo económico agotado, que produce informalidad funcional —es decir, que sirve a la “acumulación del sistema transitista”—, a través de la creación una gran masa marginal que impacta en la desvalorización de la fuerza de trabajo (su precio de mercado). Esta fábrica de pobreza trae de manera inevitable, la fractura del tejido social y la emergencia de diversas formas de violencia; acarrea además, la ruptura o desvinculación de importantes segmentos sociales de población con desdibujadas referencias culturales institucionales de integración social y convivencia.

Los jóvenes de nuestro país (15 a 24 años) registraron una tasa de desempleo del 18.1% en 2019 (OIT). Son ellos, sin duda, quienes se ven mayormente expuestos a la violencia social e institucional que se genera desde el poder concentrador y excluyente, y que llega a las calles atravesando toda la estructura sociocultural del país.

Como manifiesta la OIT, “las personas jóvenes deben afrontar un elevado índice de desempleo y subempleo y son los más vulnerables frente a una disminución de la demanda de mano obra”. Vulnerables también frente al flagelo de la violencia: entre los años 2002 al 2015 se produjeron 2487 homicidios entre el rango de edad de 20 a 29 años. Sólo el año 2011 concentró en este rango, 288 homicidios (SIEC. 2016).

Criminalidad y anomia

Unos de los padres fundadores de la sociología, Emile Durkheim, elaboró el concepto de “anomia” en su obra “La División del Trabajo Social” (1893) —categoría posteriormente estratégica en su obra el “Suicidio” (1897) —, para explicar los conflictos y desajustes que emergían de manera degradante del mundo económico social. Sin embargo, esto no significa que no existan en la sociedad marcos regulatorios de índole cultural, que por su naturaleza normativa estén en capacidad de institucionalizar los comportamientos sociales.

Sólo significa que han dejado de funcionar en ciertos ámbitos sociales, como producto de procesos de “desclasamiento” o cambios de posiciones en la estructura social de determinadas personas y grupos. También alcanza aquellos procesos que son el resultado de la marginación y el empobrecimiento masivo de la población. Por supuesto, que la pérdida de cohesión o integración social, como producto de una pauperización creciente, conlleva la pérdida también, de referentes normativos y abre la realidad social al conflicto.

De manera reciente el sociólogo Zygmunt Bauman, sociólogo polaco-británico (1925-2017), empleó el concepto de “anomia” en su visión de disolución de diversos ámbitos de la vida social, como resultado del desorden que produce la globalización. Bauman acuña en concepto de “sociedad líquida” para referirse a “una época de des-compromiso, elusividad, huida fácil y persecución sin esperanzas”. Un tema de naturaleza afectiva a interpretar en aquellos a los que se les ha negado toda oportunidad de realización social.

La Anomia Institucional

El sociólogo argentino Ricardo Sidicaro ha llevado el concepto de anomia a nivel institucional, para referirse al incumplimiento sistemático de normas y regulaciones por instituciones y funcionarios públicos.

En Panamá, la paulatina disolución del papel interventor y cohesionador de las instituciones, su creciente debilitamiento, la entronización de la corrupción como práctica obligada e institucionalmente permisiva, el incremento de los personalismos, nepotismos, las opacidades en las contrataciones públicas, han generado—de manera preocupante— modelos de comportamientos de criminalidad y corrupción en nuestra sociedad.

Con todo, si queremos poseer país tenemos que asumir políticamente un doble

reto: desafiar la “geografía de la desigualdad y del delito”. Esto significa, enfrentar desde un enfoque estructural la desigualdad social y regional; con igual fuerza, erradicar de raíz la existencia de actores públicos y privados que ejercen control en un espacio de poder paralelo, donde se han instalado carteles del narcotráfico, mafias financieras y organizaciones delictivas (pandillas), configurando una “geografía de espacios estratégicos para delinquir”. El tiempo se nos acaba.

[LEER EL ARTICULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ](#)

Fotografía: Nodal

Fecha de creación

2021/06/02